



No más zona de sacrificio

En una publicación de abril pasado del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, denominada "Primer Informe Indicador Nacional de Crimen Organizado en Chile", se sitúa a la Región de Tarapacá -por lejos- como la más afectada por delitos asociados al crimen organizado entre 2022 y 2023; seguida de la Metropolitana, Arica y Parícuta y Antofagasta.

Al calcular la tasa de delitos asociados al crimen organizado cada 100 mil habitantes, lideramos el ranking con 1.174, seguidos por Arica y Parícuta y Antofagasta y, a nivel de comunas, Iquique es la cuarta con mayor frecuencia de delitos asociados al crimen organizado sólo superada por Santiago, Valparaíso y Pudahuel. Somos una de las regiones que más concentra población extranjera, dónde es mayor la pobreza multidimensional y la que se mide por ingresos, con la más alta presencia de personas en hogares sin servicios y el mayor hacinamiento.

Sumemos a todo esto que en el pasado trimestre Enero/Marzo registramos la mayor tasa de desempleo (11,2% vs 8,7% Chile) y un nivel superior a la media nacional de informalidad laboral (28,1% vs 25,8% Chile).

Este mismo estudio revela que las 10 comunas más afectadas por delitos asociados al crimen organizado poseen factores comunes: Presupuesto municipal por habitante bajo el promedio nacional, condiciones de vulnerabilidad económica y social por sobre la media del país y, en el 80% de ellas, la mayor concentración de población migrante.

En resumen, este informe revela el impacto demoledor de convertirnos, a partir de 2022, en el epicentro de la crisis migratoria y de seguridad



El Estado de Chile nos convirtió en una zona de sacrificio (...) y convirtió al norte en el embudo por el cual entraba y salía quien quería".

Mauricio Soria,
alcalde de Iquique

que hoy se deviene en una crisis económica y social de gran magnitud.

Como Municipalidad, hacemos lo que está a nuestro alcance para impulsar la reactivación de Iquique, al igual que el Gobierno Regional, pero la magnitud del problema requiere de la intervención directa del Estado. En ese sentido, la reducción presupuestaria al Gore por 6.000 millones de pesos anunciada por el Ministerio de Hacienda, es una pésima señal que sólo agrava el problema.

Lo dijimos en su momento. El Estado de Chile nos convirtió en una zona de sacrificio, cerró fronteras en el centro del territorio para protegernos de la pandemia y convirtió al Norte en el embudo por el cual entraba y salía quien quería y con lo que quería. Por ello, es el propio Estado, en este gobierno y el próximo, el que debe iniciar un programa especial para la recuperación económica y de desarrollo humano de Iquique y Tarapacá. Para ello, tenemos proyectos y propuestas concretas que requieren de su atención e inmediata acción.